

Corte Suprema de Justicia para su revision.

Lo decretó y firmó el C. Lic. Conrado Dias Soto, Juez de Distrito del Estado.

Doy fé.—*Conrado Diaz Soto*.—*Donaciano Monroy*, secretario.

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Diciembre 11 de 1873.—*Conrado Diaz Soto*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 5 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el C. Francisco Lobo Guerrero, por violacion de la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitucion federal; el informe de la autoridad responsable; el pedimento fiscal; el fallo de primera instancia y considerando: que el alcalde 3º constitucional al reducir á prision á Lobo Guerrero por faltas de respeto á la autoridad, obraba dentro del límite de sus facultades; y siendo por tanto la autoridad competente, no puede existir la denunciada violacion del artículo 16 de la Constitucion; se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada en 11 de Diciembre del año próximo pasado por el C. Juez de Distrito de San Luis Potosí, que niega el amparo solicitado por D. Francisco Lobo Guerrero, contra la Orden de aprehension, del C. alcalde 3º constitucional de esa capital. Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia, y archívese el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias*.—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozano*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Auza*.—*S. Guzman*.

—*L. Velasquez*.—*José García Ramirez*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 28 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por el C. Lic. D. José Joaquín Peña, contra la resolución de la 3ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en que se le declaró suspenso en los derechos de ciudadano.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Gefe de Hacienda en funciones de Promotor fiscal, expone: que el C. Lic. José Joaquín Peña, pide amparo contra la resolución de la tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en que se declaró suspenso de los derechos de ciudadano, ó comprendido en la fraccion 5ª del artículo 18 de la Constitucion del mismo Estado.

Los fundamentos de esta solicitud, los he hecho constar en mi petición fiscal de 18 del mes actual, y hoy me corresponde pedir segun la ley de 20 de Enero de 1869, si se otorga ó no el recurso solicitado.

Por las copias certificadas que se encuentran en estos autos, se vé que el Lic. José Joaquín Peña fué declarado bien preso en 2 de Agosto de 1872, por el delito de ocultacion de intereses, pertenecientes á la mortal del Presbítero Luis Vargas; que de ese auto apeló, cuyo recurso se le concedió con consulta de letrado: que mejorada y sustanciada la apelacion por la 3ª Sala del Superior Tribunal de Justicia, se declaró el 11 de Enero último: "que son de suspenderse y se suspenden los efectos del auto de for-

mal prisión apelado, subsistiendo los presuntos culpables en libertad bajo la fianza que tienen otorgada, entre tanto se subsanan conforme á derecho, los defectos que contiene." Posteriormente el C. Lic Clemente F. Robles, pidió ante la misma 3ª Sala que declarase si el Sr. Lic. D. José Joaquín Peña se halla en aptitud para ejercer la judicatura, hallándose bajo de fianza y preso en su casa solo por causa de enfermedad; á lo cual se resolvió que ocurriría el peticionario al Juzgado del conocimiento, para que se resolviera lo que en derecho correspondiera; y hecho esto, y después de decidir el Juzgado de 1ª instancia del ramo criminal, que no había dictado sentencia interlocutoria ni definitiva que innovase la de 11 de Enero referido, la misma 3ª Sala resolvió: que el Lic. José Joaquín Peña se encontraba comprendido en la fracción 5ª del artículo 13 de la constitucion del Estado.

He aquí el Juez de Distrito, el extracto fiel de los autos, y del cual se deducen dos consecuencias forzosas. 1ª: Que el auto de formal prisión decretado contra el Lic Peña, *está suspenso* hasta subsanar los defectos cometidos en el proceso; es decir, no había auto de formal prisión, y 2ª: que por estar indiciado el Lic Peña en el delito de ocultacion de intereses, *permanencia bajo de fianza*.

La esplicación dada por la 3ª Sala en el escrito presentado por el Lic. Robles, hiede en verdad las garantías individuales del Lic. Peña, 1ª: porque lo condena á perder los derechos de ciudadano; sin haberle oído, lo cual baricña la fracción 2ª y 5ª del artículo 20 de la Constitución general de la República. Al Lic. Peña no se le tomó su declaración preparatoria, ni se le ha oído en defensa según se manda por el artículo citado.

También á mi juicio, la 3ª Sala del Tribunal Superior de Justicia, ha juzgado con una ley privativa al Lic. Peña, y esa ley privativa es su citada resolución, porque no

hay *ley vigente* en el Estado ni en la República, que mande, que un auto de formal prisión y por estar bajo de fianza, se pierden los derechos políticos, entre los cuales se encuentra el de poder ejercer la judicatura; y este proceder infinge notablemente el artº 13 de la Constitución.

El precitado Magistrado, al declarar que el Lic Peña tenía suspensos sus derechos de ciudadano, no aplicó con exactitud leyes dadas con anterioridad al hecho, sino que aplicó su opinion, en el caso que se le consultaba, y el cual no pudo ni remotamente haberse resuelto en su sentencia definitiva de 11 de Enero citado. Esta conducta viola el artículo 14 de la Constitución general.

Finalmente, el Lic Peña ha sido molestado en su persona por una autoridad incompetente. El único Tribunal que puede dictar el auto de formal prisión, es el de primera Instancia del ramo criminal, y este ha certificado que no ha provido el mencionado auto; pero según el parecer de la 3ª Sala citada, lo hay por que produce uno de sus mas tremendos efectos, *suspender los derechos de Ciudadano Chiapaneco*. Y esta molestia tan personal, se la ocasionado por la 3ª Sala del Tribunal de Justicia, que era como queda demostrado, incompetente para causarla, y debía reputarse sin ninguna jurisdiccion para esplicar sustancialmente una sentencia ejecutoriada. Este procedimiento conculca al artículo 16 de la Constitución general.

Por todo lo expuesto, el Promotor fiscal opina y pide: que V. ampare al Lic Peña contra la resolución de la 3ª Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado de 5 de Junio próximo pasado, en que se declaró suspenso de los derechos de ciudadano.

Es justicia que pido, y en forma protesto
San Cristóbal Las Casas, Julio 26 de 1873.—José Pablo Tobilla.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Vistos: —El Lic. Don José Joaquín Peña, se presentó á este Juzgado de Distrito con fecha 14 del mes de Julio último, pidiendo protección y amparo á la Justicia federal, contra una resolución de la 3ª Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado, que lo declara comprendido en la fracción 5ª del artículo 13 de la Constitución del mismo, y con cuya declaratoria estima violados en su persona los artículos 13, 14, 16 y fracciones 2ª y 5ª del 20 de la Carta fundamental de la República, de 5 de Febrero de 1857.

La parte interesada hizo formal instancia para que se suspendiese desde luego dicha providencia, y así se verificó por auto de 18 del propio mes citado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Pedido el informe con justificación correspondiente, á la 3ª Sala del Tribunal Superior de Justicia, expuso: que se refería al que había emitido anteriormente, y se le había pedido para resolverse el punto de la suspensión de la providencia reclamada. En él manifiesta: que en 2 de Agosto del año próximo pasado, el Juzgado de 1ª instancia del ramo de lo criminal de este departamento, proveyó auto de formal prisión contra el Lic. D. José Joaquín Peña y cómplices, por presunciones de hurto ó ocultación de bienes pertenecientes á la mortal del Presbítero Don Luis Vargas: que habiendo los interesados apelado de dicho auto, y tramitado el recurso, se resolvió: "que eran de suspenderse y se suspendían los efectos del auto de formal prisión apelado, subsistiendo los presuntos culpables en libertad bajo la fianza que tenían otorgada, entre tanto se subsanaban conforme á derecho los defectos que contenían tanto por el carácter de las diligencias que lo motivaron, como por la calidad del Juzgado que lo proveyó, á fin de que no se hiciera ilusoria la acción de la ley, atribuciones de la autoridad

en su propia competencia, y garantía de los interesados; todo sin perjuicio de lo determinado en su favor, por causa de enfermedad": que en este estado las cosas, á pedimento del C. Lic. Clemente F. Robles, quien pretendía saber si Peña podía asesorar en causas civiles y criminales, y después de cerciorado de que no se había dictado auto interlocutorio, ni definitivo por el inferior, que inovara el de dicha causa, la referida Sala hubo de declarar con fecha 5 de Junio del corriente año, "que el procesado se halla comprendido en la fracción 5ª del artículo 13 de la Constitución política del Estado," que testualmente dice: "Artículo 13. Se suspende el ejercicio de los derechos de Ciudadano.

5º: Por hallarse procesado criminalmente desde que se decretó la prisión con las formalidades de ley, ó el auto de haber lugar á la formación de causa en los juicios de responsabilidad, hasta la sentencia absolutoria;" concluyendo con otros razonamientos para demostrar la improcedencia del amparo pedido.

La autoridad informante adujo algunos documentos justificativos, que se contraponen á las resoluciones de que anteriormente se ha hecho mérito; al auto de formal prisión decretado por el inferior contra la parte que ha promovido el presente juicio y sus cómplices, y á la resolución en que se manda circular la suspensión de la providencia reclamada, decretada por este Juzgado, la cual, en sentir de la autoridad informante, habilita al Lic. Peña á importar un ataque á la soberanía é independencia del poder judicial del Estado.

Emitido el informe, del cual se ha hecho un trasunto fiel; oída en traslado la Gefatura de Hacienda que, por haberse declarado con lugar la recusación que el promoviente interpuso contra el C. Promotor fiscal, ha tenido que representar el Ministerio público, manifestando de la manera mas formal y acabada su opinión en favor del demandante; y no habiéndose recibido á prue-

ba el juicio, por no existir punto alguno de hecho que esclarezca, se mandó citar para sentencia, y á poner de manifiesto los autos por el término de seis días, para los efectos del artículo 13 de la ley de 20 de Enero citada, sin que ninguna de las partes hubiere hecho uso de su derecho.

En tal virtud, debiéndose emitir el fallo correspondiente, para hacerse con clara y manifiesta expresion de causa, se hace necesario considerar.

Primero: que determinando el artículo 13 constitucional, que *en la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales*, y no existiendo como no se ha demostrado que exista, ley alguna privativa que en el caso que el quejoso propone á la deliberacion judicial, haya tenido aplicacion, ni menos que la referida 3ª Sala sea un Tribunal especial, por que al hacer, como ha hecho, una aclaratoria sobre la inteligencia de una resolucion propia, ha usado de su derecho, puesto que quien da la resolucion es el único que puede aclarar las dudas sobre lo resuelto; es inconcuso que no se ha vulnerado dicho artículo constitucional, sin que á esto obste la opinion del representante de la voz fiscal, que quiere que la resolucion misma de la Sala, sea la ley privativa que ahora se ha aplicado; porque en una resolucion, cualquiera que sea la jerarquía de la autoridad de que nazca, no es ni puede llamarse ley.

Segundo: que disponiéndose en la parte respectiva del artículo 14, que *nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley*; tampoco puede estimarse violado este artículo con la referida resolucion, por que menos se ha acreditado existencia de leyes posteriores aplicables á hechos preexistentes, y cuya aplicacion importara un efecto retroactivo, no obstante que dicha Sala haya aplicado su opinion, como expresa el Minis-

terio público, si ésta no lleva por fundamento una disposicion posterior al hecho que la motiva.

Tercero: que determinando así mismo el artículo 16, que *nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento*; y siendo su objeto poner coto á las arbitrariedades y violencias que se cometen contra la libertad, la familia y los intereses, mediante los cateos, las prisiones, el registro de papeles y otras molestias practicadas sin autorizacion alguna; y no pudiendo esperarse ni temerse de la resolucion de que se deriva el presente juicio, iguales consecuencias, por que no caben ni en su letra ni en su espíritu, no puede igualmente sostenerse que ella vulnere el artículo citado.

Cuarto: que menos pueden sostenerse las conculcaciones de las fracciones 2ª y 5ª del artículo 20, que disponiendo que *se le tome al acusado su declaracion preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, contadas desde que esté á disposicion de su Juez, y que se le oiga en defensa por sí ó por persona de su confianza ó por ambas, segun su voluntad*; debe entenderse para el caso de un proceso en forma; mas no para el de una particularidad como la de que se trata, lo cual es conforme con el concepto, en todo juicio criminal, de que usa el artículo 20 mencionado.

Quinto: finalmente, que si el Juzgado de Distrito suspendió la providencia reclamada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, ni tal suspension, que dispone dejar las cosas en tal estado, importa rehabilitacion alguna, ni menos un ataque á la independencia del poder Judicial del Estado; porque quien usa de una facultad legal, no ataca ni vulnera derecho alguno.

Por virtud de todo lo expuesto, y viendo y considerando cuanto verse y considerarse debía, y con fundamento de los artículos

101 y 102 de la Constitucion federal y 13, 16, 27 y 29 de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia federal no ampara ni protege al Lic. D. José Joaquín Peña, contra la resolucíon de 5 de Junio último, de la 3ª Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado, que declara se halla comprendido en la fracción 5ª del artículo 13 de la Constitucion del mismo, por no existir la violacion de las garantías que reclama; quedando exento de la pena respectiva, por hallarse comprendido en la parte final del artículo 16 que de ella trata.

Hágase saber; líbrense las copias correspondientes para su publicacion, y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia, para lo que en su vista tenga á bien determinar.

Así lo proveyó, mandó y firmó el C. Lic. Juan José Ramírez, Juez de Distrito propietario del Estado de Chiapas, ante el infrascrito Escribano del despacho, que dá fé.
—*Juan J. Ramírez.—J. Crisóstomo Lara.*

Es copia que certifico. San Cristóbal Las Casas, 6 de Agosto de 1873.—*J. Crisóstomo Lara.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 4 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chiapas por D. José Joaquín Peña, contra la 3ª Sala del Tribunal Superior del Estado, que habiendo mandado suspender en grado de apelacion y con fecha 11 de Enero de este año, los efectos del auto de prision decretado contra el quejoso por el Juez de 1ª instancia, mientras se subsanaban las irregularidades con que habia sido proveído, declaró posteriormente sin oírle, y á mocion de una persona que no era parte en el juicio; que en fuerza de ese mismo auto de prision estaba comprendido en la fracción 5ª del artículo 13 de la Cons-

titucion particular del Estado, que dispone: que los derechos de ciudadano chiapaneco se suspendan desde que se decreta la prision con las formalidades de la ley; cuya resolucíon viola en concepto del quejoso, las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitucion de la República.

Considerando: que la declaracion que ha motivado este recurso, es contraria al artículo 14 de la Constitucion federal en la parte que dispone: que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes exactamente aplicables al caso, pues que una vez declarado por el mismo Tribunal que debian suspenderse los efectos del auto de prision por las irregularidades con que habia sido decretado, malamente podia resolver que el quejoso estaba comprendido, en virtud de ese mismo auto, en la fracción 5ª del artículo 13 de la Constitucion del Estado, cuando esta disposicion previene terminantemente, que el auto de prision decretado con las formalidades de la ley, es el que suspende los derechos de ciudadano de Chiapas.

Con fundamento del artículo 101 de la Constitucion federal, se decreta. Primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 5 de Agosto del presente año, que declaró no haber lugar al amparo federal. Segundo: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. José Joaquín Peña, contra la resolucíon de 5 de Junio último de la 3ª Sala del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, que declaró estar comprendido en la fracción 5ª del artículo 13 de la Constitucion del Estado.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—

Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Lic. Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, 17 de Noviembre de 1873.—*Lic. Enrique Landa, secretario.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por varios reos, contra el procedimiento por el que fueron presos en San Juan Tecomatlan.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez;

El Promotor fiscal dice: Vicente López y socios, todos en número de once personas, piden amparo contra el C. Gobernador del Estado y con apoyo de los artículos 19 y 20 de la Constitución, sin expresar, como debían, en cual de las fracciones del artículo 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, fundan su recurso. Alegan, que habiendo sido presos el 4 de Febrero último en San Juan Tecomatlan, por el Comandante de acordada, C. Antonio Veitia, se les remitió á esta ciudad despues de algun tiempo, donde ha continuado su prision en la Penitenciaría, sin que se sepa por qué delito fueron sentenciados, ni á qué pena. Por el informe que ha rendido el C. Gobernador, acompañando la resolución del Consejo de Gobierno, consta que los quejosos fueron sentenciados á muerte por la autoridad política de Chapala, con arreglo á la ley de 23 de Mayo del año último, y que habiéndose remitido el acta respectiva al consejo de Gobierno para que consultase sobre el indulto de los reos, esta corporación mandó

subsanan ciertas faltas sustanciales que notó en el procedimiento.

Cree por lo expuesto el Promotor que al retener presos á los amparantes que fueron juzgados y sentenciados por la autoridad competente, no se infringen en perjuicio de todos las garantías consignadas en los artículos 19 y 20 de la Constitución; pero que habiendo sido condenados Julian Ramos y Gertrudis García sin haberles tomado su inquisitiva, ni recibido pruebas ni oído en defensa, contra estos dos se han atacado las garantías mencionadas, y si no se han subsanado ó por lo menos comenzado á subsanar por la inquisitiva y auto de bien presos los defectos que sobre el procedimiento notó el Consejo con relación á los mencionados, debe protegérseles por la justicia federal, y por lo mismo concluye pidiendo.

Primero: Que la Justicia de la Union ampare y proteja á Julian Ramos y Gertrudis García por la prision de que se quejan, si por no haberse enmendado los defectos notados por el Consejo en el procedimiento contra los repetidos, aparece todavía al presente sin motivarse por el auto respectivo.

Segundo: Que respecto de los demas quejosos, no los ampare ni proteja, en virtud de las razones expuestas.

Guadalajara, Mayo 15 de 1873.—*A. Camarena.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Mayo 28 de 1873. Vistos: Vicente López, Lino Cruz, Marcos Ramírez, Felipe Clemente, Julian Ramos, Jacinto Cervantes, Francisco Guardado, Espiridion Javier, Gertrudis Rico, Gertrudis Ramos ó García y Pedro Murguía, entablaron ante este Juzgado, juicio de amparo y protección de garantías, exponiendo: que el día 7 de Febrero último, fueron aprehendidos en San Juan Tecomatlan por el comandan-